



ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “MAXIMINO ESPINOLA MARTINEZ C/ LOS ARTS. 108 Y 113 DE LA LEY 5554 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”, LA LEY 4252/2010 MODIFICATORIA DE LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 10 DE LA LEY 2345/03 “DE LA REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO” EL ART. 260 DEL DECRETO N.º 4774/2016”. AÑO: 2016 – N.º 1312.-----



ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: mil seiscientos tres.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 15 días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores **ANTONIO FRETES, GLADYS BAREIRO DE MÓDICA** y **MIRYAM PEÑA CANDIA**, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: **ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “MAXIMINO ESPINOLA MARTINEZ C/ LOS ARTS. 108 Y 113 DE LA LEY 5554 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”, LA LEY 4252/2010 MODIFICATORIA DE LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 10 DE LA LEY 2345/03 “DE LA REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO” EL ART. 260 DEL DECRETO N.º 4774/2016”**, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado Arsenio Eduardo Aguayo Ávila, en nombre y representación del Señor Maximino Espínola Martínez.-----

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: -----

CUESTION:

¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?-----

A la cuestión planteada la Doctora **PEÑA CANDIA** dijo: La presente acción de inconstitucionalidad fue presentada por el Abg. Arsenio Eduardo Aguayo Ávila, en representación del señor Maximino Espínola Martínez, contra la Ley N.º 4252/2010 que modifica los Arts. 3.º, 9.º y 10 de la Ley N.º 2345/2003, contra los Arts. 108 y 113 de la Ley N.º 5554 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016” y contra el Art. 260 del Decreto N.º 4774/2016 “Por el cual se reglamenta la Ley N.º 5554/2016”.-----

Alega el accionante que las disposiciones impugnadas lesionan los derechos a la carrera administrativa, a la igualdad ante la ley, al trabajo, entre otros, consagrados en los Arts. 4, 47, 49, 86, 95, 101 y 103 de la Constitución Nacional. Aduce que la amenaza que cierne a su mandante de quedarse desocupado significa de hecho reducir sus oportunidades de una vida digna y la disminución de sus recursos para enfrentar las exigencias de la vejez. Sostiene que al ser el señor Maximino Espínola despojado de su puesto de trabajo, pasará a un estado de desprotección.-----

Las normas impugnadas son las siguientes:-----

El artículo 9º de la Ley N.º 2345/2003, modificado por el Art. 1º de la Ley N.º 4252/2010, establece: “*El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución*”

Miryam Peña Candia
MINISTRA C.S.J.

Dr. ANTONIO FRETES
Ministro

GLADYS E. BAREIRO de MÓDICA
Ministra

Abog. Julio C. Pavón Martínez
Secretario

será del 47% (cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2,7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100% (cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, **la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la extraordinaria...**” (Las negritas son mías).-----

El Artículo 108 de la Ley N° 5554/2016 prescribe: “El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) y la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC) respectivamente, otorgará por resolución basada en las normas legales de la materia las jubilaciones y sus mejoras al personal de la Administración Pública sujeto al régimen de la Caja Fiscal de Jubilaciones y Pensiones del Estado, así como los haberes de retiro del personal de las Fuerzas Armadas de la Nación, de los miembros de la Policía Nacional y las pensiones a los herederos de los mismos, a los Veteranos de la Guerra del Chaco y sus herederos, los herederos de policías y militares fallecidos en acto de servicio y a los adultos mayores en situación de pobreza”.-----

El Artículo 113 del mismo cuerpo legal afirma: “El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, procederá a disponer la jubilación automática de todos los funcionarios de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) que hayan cumplido con los requisitos establecidos en las disposiciones legales vigentes”.-----

El Art. 260 del Decreto N.º 4774/2016, que reglamenta el Art. 113 de la Ley N.º 5554/2016, dispone: “Para el trámite de la jubilación automática los OEE deberán ajustarse a lo establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo N.º 494712010, “POR EL CUAL SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS BÁSICOS PARA LA CONCESIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIÓN, DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE HACIENDA”, exceptuando para estos casos el consentimiento del funcionario, requerido en el Formulario de solicitud y registro del interesado (Artículo 2º, Inciso b). La DGASP y BE remitirá a los OEE y a la DGJP la planilla de funcionarios que hayan alcanzado la edad de 65 años, incluyendo los que alcancen dicha edad en el presente Ejercicio Fiscal”.-----

La primera norma en estudio – Art. 1º de la Ley N° 4252/2010 – es impugnada, esencialmente, porque impone la obligación de jubilarse a los 65 años, y porque así atenta contra derechos y principios consagrados en la Constitución, como ser el derecho a la vida. El derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la familia, entre otros.-----

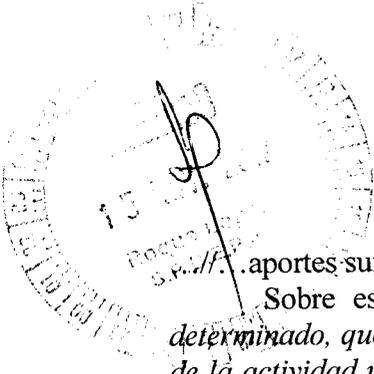
Al respecto, es menester tener presente que la jubilación fue instituida como un derecho que asiste a todos los funcionarios o empleados activos, que han aportado parte de su salario por determinado tiempo y cumplido con los requisitos legales para poder retirarse de la función, a cambio de una renta o remuneración vitalicia, que le permita llevar una vida digna. “La jubilación tiene por objeto asegurar una subsistencia digna para aquellos que no pueden, por razones de salud, proseguir prestando servicios laborales y a las personas que, en un momento avanzado de sus vidas, deciden voluntariamente cesar en la prestación de actividades laborales o productivas” (BADENI, Gregorio. *Tratado de Derecho Constitucional*. Tomo I. Ed. La ley. Buenos Aires. Argentina. 2006. Pág. 918).-----

Debemos decir que de todos los supuestos de inactividad cubiertos por los sistemas de protección social, el más importante es, sin duda, la jubilación por edad; ello no sólo porque es la causa más frecuente, considerando el término previsible y normal de vida profesional, sino por el progresivo aumento de la edad media de la población y de su expectativa de vida actual.-

La jubilación no puede –ni debe– tener carácter de sanción. La jubilación obligatoria, que fuerza al funcionario público a dejar su trabajo siendo aún apto para el mismo y teniendo aún idoneidad para seguir sirviendo a la comunidad, no se condice con la finalidad última del mencionado instituto previsto en el marco de un sistema de protección social. Ello se agrava cuando el funcionario público obligado a la jubilación no cuenta con la cantidad de...//...



ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “MAXIMINO ESPINOLA MARTINEZ C/ LOS ARTS. 108 Y 113 DE LA LEY 5554 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”, LA LEY 4252/2010 MODIFICATORIA DE LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 10 DE LA LEY 2345/03 “DE LA REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO” EL ART. 260 DEL DECRETO N.º 4774/2016”. AÑO: 2016 – N.º 1312.-----



...aportes suficientes para recibir la remuneración o renta vitalicia correspondiente.-----
Sobre este punto, la doctrina señala: *“La jubilación por vejez tiene un objetivo determinado, que es el de asegurar a aquellos trabajadores que se retiran total o parcialmente de la actividad una compensación que les permita mantener su estándar de vida como si aún estuviera en actividad. Es una ayuda basada en la solidaridad a la cual tienen derecho por haber contribuido a ella durante su vida útil con una parte de los ingresos producto de su trabajo”* (RUPRECHT, Alfredo J. *Prestaciones Económicas Vitalicias: Pensiones de Jubilación, Invalidez, Muerte y Supervivencia*. DE BUEN LOZANO, Néstor y MORGADO VALENZUELA, Emilio (Coordinadores). Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. México D.F. IJ-UNAM. 1997. Pág. 710).-----

Lo señalado se trasluce en el Art. 6º de la Constitución Nacional que dice: *“La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad...”* (las negritas son mías), es justamente la Seguridad Social -también prevista en el art. 95 de la Constitución- uno de los instrumentos por medio del cual el Estado cumple su obligación de garantizar la calidad de vida de las personas; y, entre los institutos de la Seguridad Social se encuentra la jubilación.-----

En esta línea de razonamiento, una norma que impide al individuo desarrollarse dignamente como persona por medio del trabajo - cuando aún se encuentre en condiciones físicas y síquicas aptas para hacerlo - no es funcional a la norma constitucional citada. Por otro lado, la situación se agrava cuando el haber jubilatorio otorgado al individuo es exiguo, impidiéndole afrontar dignamente los avatares propios de la vida y de la edad; en efecto, es bien sabido que a medida que la persona avanza en años, los requerimientos de la salud van también en aumento, circunstancia que impone que el individuo cuente con un haber jubilatorio razonable que le permita acceder a una vida en las condiciones garantizadas por la Carta Magna.-----

Esta Sala Constitucional ha sostenido, en reiterados fallos uniformes, que una persona jubilada –mayor a 65 años de edad– puede volver a ingresar en la función pública, sin más requisito que lo establecido en el Art. 47 numeral 3) de la Constitución, es decir, la idoneidad, que es la capacidad o capacitación para el desempeño de un cargo o función pública (Ac. y Sent. N.º 604 del 9/05/2016; N.º 573 del 2/05/2016 y N.º 2034 del 31/12/2013, entre otros); *“...para los demás empleos –que debemos entender referidos a los empleos públicos– la idoneidad es la pauta exclusiva con que puede manejarse la forma y la selección de los candidatos. Todo requisito exigible debe filtrarse a través de la idoneidad, o sea, configurar un elemento que califique a la idoneidad...”* (BIDART CAMPOS, Germán. *Manual de la Constitución Reformada*. Tomo I. Editorial Ediar. Buenos Aires. Argentina. 2001. Pág. 539).---

Los argumentos expuestos en los párrafos precedentes son absolutamente suficientes para determinar la suerte de la presente inconstitucionalidad; sin embargo, no resulta superfluo considerar una última circunstancia que refuerza todavía más - por si fuera necesario - la tesis hasta aquí esbozada, y que guarda relación con una garantía fundamental en materia de derechos laborales, cual es, la estabilidad, prevista en el Art. 94 de la Constitución.-----

En efecto, la estabilidad implica que un trabajador tiene derecho a conservar su empleo durante toda su vida de trabajo, sin que pueda privarsele del mismo, a menos que exista una

María Belia Candia
MINISTRA C.S.J.

Dr. ANTONIO PRETES
Ministro

GLADYS E. BAREIRO de MÓNICA
Ministra

Abog. Julio C. Pavón Martínez
Secretario

causa que justifique ya sea el despido o alguna otra forma de desvinculación.-----

La doctrina, al respecto, tiene dicho: *“El derecho del trabajo no admite que el empleador pueda usar de esa posibilidad (resolución del contrato de trabajo); a tal efecto concede al contrato – en lo que respecta al trabajador – una cierta vocación de permanencia, limitada en los casos de excepción en que se admite la contratación por tiempo determinado; en cambio, si se admite ésta posibilidad de resolución a favor de éste, que sólo está obligado – si no mediere un contrato a plazo – a notificar su decisión (...) Ese derecho –estabilidad a favor del trabajador– constituye una garantía de la conservación del empleo...”* (VAZQUEZ VIALARD, Antonio. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires. Argentina. 1999. Pág. 348). La estabilidad en el empleo es, en resumidas cuentas, *“el derecho del trabajador a permanecer en el trabajo mientras su actividad sea necesaria para el empleador”* (DE BUEN UNNA, Carlos. La extinción de la relación de trabajo en DE BUEN LOZANO Néstor y MORGADO VALENZUELA, Emilio (Coordinadores) 1997. Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. México D.F. IJ-UNAM Págs. 504/505). Así pues, la norma cuya constitucionalidad se cuestiona atenta también contra la garantía de estabilidad en el empleo, al forzar la jubilación de los funcionarios públicos sin contemplar, entre otros factores, la necesidad que pudiera existir respecto de la actividad del funcionario.-----

En este orden de ideas, no existe impedimento para que un funcionario público que ha superado los sesenta y cinco años de edad pueda seguir trabajando y aportando a la sociedad. Esta hermenéutica no podría invocarse como perjudicial para la calidad de la función pública, dado que la Ley N° 1626/2000 prevé los mecanismos para la remoción o recambio de los funcionarios que dejen de ser aptos para la labor encargada o ya no cumplan con las obligaciones encomendadas.-----

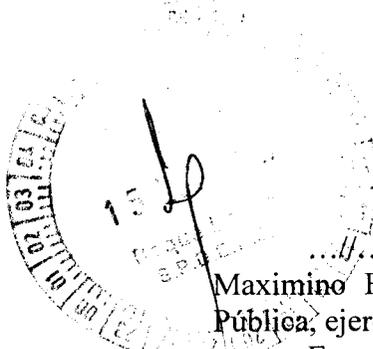
Con relación al Art. 108 de la Ley N° 5554/2016, la accionante no expresó agravios contra el mismo. Desde luego, la norma en cuestión no puede causarle perjuicio alguno, ya que autoriza a las Instituciones competentes a otorgar beneficios a jubilados y pensionados, por lo que no encuentro méritos para declararlo inconstitucional. Sin embargo, en cuanto al Art. 113 de la Ley N° 5554/2016 y al Art. 260 del Decreto N° 4774/2016, considero que, como lógica consecuencia del análisis precedente, devienen inconstitucionales pues también se refieren a la jubilación obligatoria (automática) por haber alcanzado los 65 años de edad, dispuesta en el Art. 1° de la Ley N° 4252/2010, que modifica el Art. 9° de la Ley N° 2345/2003.-----

En conclusión, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar inaplicable con relación al accionante el Art. 1° de la Ley N° 4252/2010 – que modifica el Art. 9° de la Ley N° 2345/2003 –, el Art. 113 de la Ley N° 5554/2016 y el Art. 260 del Decreto N° 4774/2016, específicamente en la parte que establecen la obligatoriedad de acogerse a la jubilación. **Voto en ese sentido.**-----

A su turno el Doctor **FRETES** dijo: El Abg. Arsenio Eduardo Aguayo Ávila , en nombre y representación del señor Maximino Espínola Martínez, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley N° 4252/2010 *“QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 10 DE LA LEY 2345/03 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO”*, contra Arts. 108 y 113 de la Ley N° 5.554 *“Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.016”* y contra el Art. 260 del Decreto N° 4774/2016 *“Por el cual se reglamenta la Ley N° 5554/2016”*.-----

Refiere que los artículos impugnados por medio de esta acción de inconstitucionalidad infringen las disposiciones contenidas en los Arts. 4, 49, 86 y 95 de la Constitución Nacional.-----...//...

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “MAXIMINO ESPINOLA MARTINEZ C/ LOS ARTS. 108 Y 113 DE LA LEY 5554 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”, LA LEY 4252/2010 MODIFICATORIA DE LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 10 DE LA LEY 2345/03 “DE LA REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO” EL ART. 260 DEL DECRETO N.º 4774/2016”. AÑO: 2016 – N.º 1312.-----



.../...Consta en autos copias de las documentaciones que acreditan que el señor Maximino Espínola Martínez, reviste la calidad de funcionario de la Administración Pública, ejerciendo actualmente el cargo de Auxiliar de la Cámara de Senadores.-----

En cuanto a la impugnación del Art. 1 de la Ley N.º 4252/2010, cabe señalar que el recurrente de manera alguna se halla legitimado a promover la presente Acción de Inconstitucionalidad, habida cuenta que tanto de sus propias manifestaciones así como de la documentación acompañada surge que el señor Maximino Espínola Martínez se desempeña como funcionario activo de la Administración Pública, es decir, aun no se ha jubilado -no ha acreditado tal extremo en autos-, por ende no ha sufrido agravio alguno que le permita alzarse contra lo establecido en la normativa impugnada, ello debido a que la misma no le ha sido aplicada.-----

Analizados los términos de la impugnación presentada, surge que los fundamentos esgrimidos no resultan aptos a los efectos pretendidos. Para que proceda estos tipos de acciones aquel que lo promueve necesariamente debe haber sido lesionado en sus legítimos derechos por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos normativos que infrinjan en su aplicación los principios o normas establecidos en la Constitución Nacional, ello de conformidad a lo establecido en el Art. 550 del C.P.C.-----

Ante tales extremos, el caso sometido a consideración, no surge como controversial sino meramente abstracto. En este sentido ya en varias oportunidades se ha expedido esta Sala al señalar que resulta harto relevante a los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de una norma que el agravio sea contemporáneo al momento tanto de la impugnación como de su resolución, exigiendo del agravio su carácter de actual. En el caso de autos, no se ha probado el cumplimiento de este requisito, concluyendo que lo que persigue el actor es una declaración de inconstitucionalidad con efectos a futuro, vale decir, para el caso de que la Administración Pública lo incluya en la nómina de funcionarios jubilados. Esta situación nos ubica no solo ante la carencia del carácter actual del agravio que se señalara, sino ante la inexistencia del agravio en sí.-----

Ahora bien, en cuanto a las impugnaciones planteadas contra los Arts. 108 y 113 de la Ley N.º 5554/16 "*Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2016*"; y contra el Art. 260 del Decreto N.º 4774/16 "*Por el cual se reglamenta la Ley N.º 5554/2016*", resulta necesario puntualizar que el accionante se ha limitado a impugnar las citadas disposiciones sin referir los agravios que los mismos le ocasionarían, como tampoco las disposiciones constitucionales conculcadas en relación a tales disposiciones, esta circunstancia impide su consideración por esta Magistratura, que de ninguna manera puede suplir por inferencia la omisión apuntada.-----

Conforme a las consideraciones precedentemente, no corresponde hacer lugar a la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Abg. Arsenio Eduardo Aguayo Ávila, en nombre y representación del señor Maximino Espínola Martínez. ES MI VOTO.-----

A su turno la Doctora **BAREIRO DE MÓDICA** dijo: El abogado Domingo Santacruz, en nombre y representación del señor Maximino Espínola Martínez, promueve acción de inconstitucionalidad contra los arts. 108 y 113 de la Ley 5554 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”,



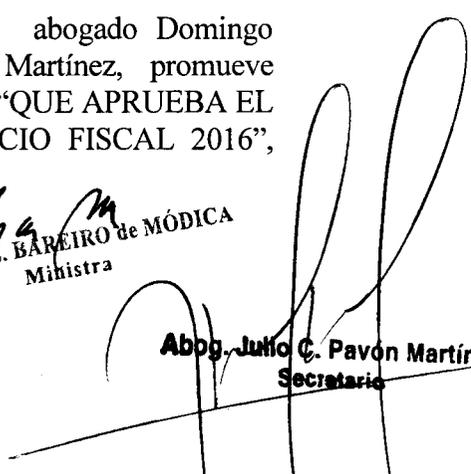
Marian Feñe Candia
MINISTRA C.S.J.



Dr. ANTONIO FRETES
Ministro



GLADYS E. BAREIRO DE MÓNICA
Ministra



Abg. Julio C. Pavón Martínez
Secretario

contra la Ley 4252/2010 modificatoria de los artículos 3, 9 y 10 de la Ley 2345/03 “DE LA REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO” y contra el Art. 260 del Decreto N° 4774/2016”.---

El accionante manifiesta que es funcionario activo de la Cámara de Senadores y de acuerdo a la copia de la cédula de identidad que acompaña y que obra a fs. 6, podemos inferir que el Señor Maximino Espínola Martínez a la fecha cuenta con 65 (sesenta y cinco) años de edad, es decir, es pasible de una inminente aplicación de la norma.-----

Acciona contra Ley 4252/2010 modificatoria de los artículos 3, 9 Y 10 de la Ley 2345/03. En referencia a los Art. 3 y 10 de la Ley 2345/03 modificados por la ley accionada, vemos que el accionante no se encuentra legitimado a los efectos de la impugnación actual de los mismos, ya que dichas normas no le afectan, por lo que en relación a ellas la acción de inconstitucionalidad debe ser rechazada.-----

Respecto del Art. 9 de la Ley N° 2345/03, en su primera parte, dispone: “*El aportante que complete sesenta y dos años de edad y que cuente con al menos diez años de servicio, tendrá que acogerse a la jubilación obligatoria...*” y en su parte final regula: “*...Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria sea ella la ordinaria o la extraordinaria*”. El citado artículo fue modificado por el Art. 1° de la Ley N° 4252/2010 que es accionada y con dicha modificación la edad para la jubilación obligatoria es ahora de 65 años cumplidos, edad que el accionante ya tiene a la fecha.-----

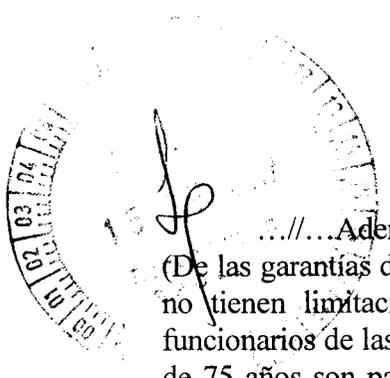
Procederé al estudio de la acción contra el Art. 9 de la Ley N° 2345/03, modificado por el Art. 1° de la Ley N° 4252/2010, que es accionado, porque el accionante es pasible de una inminente aplicación de la norma conforme a los argumentos siguientes:-----

a) Como bien es sabido, la edad es una variable que normalmente como dato de la demografía de un país, fluctúa conforme a la esperanza de vida, por lo que como tal puede, el Poder Administrador, determinarlo de acuerdo con las características propias del país. En ese sentido, la edad de “65 años” establecida en la Ley N° 4252/10 no surge como consecuencia directa y verificable de la expectativa de vida de la población paraguaya. Si bien el Poder Administrador a través de una norma que lo habilita puede proceder a hacer efectivas determinadas “políticas públicas”, sin embargo, considero que ellas nunca pueden ser operadas en perjuicio de la calidad de vida de sus afectados.-----

Es preciso traer a colación el informe brindado por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, en el cual se deja expresa constancia que la esperanza de vida al nacer es la siguiente: Ambos sexos: 71,76; Hombres: 69,70; Mujeres; 73,92, aclarando que la definición utilizada para la esperanza de vida al nacer es la siguiente: “Es el número de años de vida que en término medio se espera que viva un recién nacido, de no variar la tendencia en la mortalidad” (Informe brindado en la Acción de Inconstitucionalidad: “Julio César Cantero Agüero c/ Art. 9 de la Ley N° 2345/2003”. N° 1579/09). Siendo así, considero que la edad de 65 años establecida en la norma impugnada no se encuentra razonablemente dimensionada, ni coincide en forma directa con la esperanza de vida, ni mucho menos es consecuencia de una verificación de la expectativa de vida de la población paraguaya, de acuerdo con el informe brindado por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos.-----

Por ello, entiendo que la Ley N° 4252/10 (Que modifica el Art. 9 de la Ley N° 2345/03) resulta violatorio de los Arts. 6 de la Constitución Nacional: “...De la calidad de vida. La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad...”; Art. 57: “...De la tercera edad. Toda persona en la tercera edad tiene derecho a una protección integral. La familia, la sociedad y los poderes públicos promoverán su bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio...”.-----...//...

**ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:
“MAXIMINO ESPINOLA MARTINEZ C/ LOS
ARTS. 108 Y 113 DE LA LEY 5554 “QUE
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE
LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
2016”, LA LEY 4252/2010 MODIFICATORIA DE
LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 10 DE LA LEY 2345/03
“DE LA REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE
LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE
JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR
PÚBLICO” EL ART. 260 DEL DECRETO N.º
4774/2016”. AÑO: 2016 – N.º 1312.-----**



...//...Además, también contraviene los Arts. 46 (De la igualdad de las personas) y 47 (De las garantías de la igualdad) de la Carta Magna, ya que los trabajadores del sector privado no tienen limitaciones de edad para prestar sus servicios al empleador, e inclusive los funcionarios de las Fuerzas Armadas y Policiales, Magistrados en general, etc. recién a la edad de 75 años son pasibles de una jubilación obligatoria, situación que confirma la desigualdad existente hasta la fecha.-----

Por otro lado, el cálculo dispuesto por la Ley en base a la multiplicación de la Tasa de Sustitución por la Remuneración Base, así como la escala establecida en el Decreto Reglamentario, no permiten que la jubilación cumpla con el rol sustitutivo de la remuneración en actividad, rompiéndose el equilibrio que debe existir entre las remuneraciones de quienes se encuentran en actividad y los haberes de los jubilados. En este punto, la normativa legal y reglamentaria impugnada se oponen expresamente a lo que dispone el Art. 103, Segundo Párrafo, de nuestra Ley Suprema: “La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad”, ya que el conveniente nivel del haber jubilatorio solo se haya cumplido cuando el jubilado mantiene las condiciones patrimoniales equivalentes a la que le habría correspondido gozar en caso de continuar en actividad, por lo que cualquier normativa legal o reglamentaria que regule esta cuestión debe respetar lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 103 de la Constitución Nacional.-----

Las políticas salariales del Estado no deben derivar en modificaciones sustanciales del haber jubilatorio, que signifiquen una retrogradación en la condición de los pasivos, por lo que es inconstitucional que el Estado cause un menoscabo patrimonial a las acreencias previsionales, privándolas de un beneficio legalmente acordado.-----

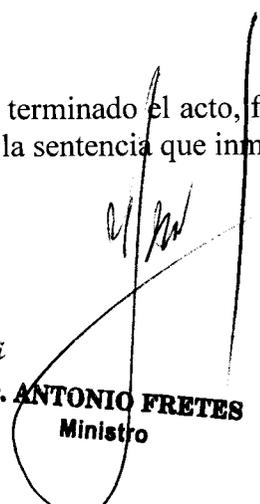
Por las consideraciones vertidas soy del parecer que debe hacerse lugar a la acción de inconstitucionalidad incoada contra el Art. 9 de la Ley N.º 2345/03, modificado por el Art. 1.º de la Ley N.º 4252/2010, respecto del accionante y en la parte que establece la jubilación obligatoria a los 65 años cumplidos.-----

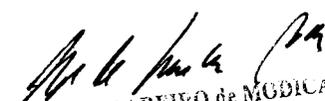
En cuanto a la acción de inconstitucionalidad promovida contra los arts. 108 y 113 de la Ley 554 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016” y contra el Art. 260 del Decreto N.º 4774/2016 (decreto reglamentario) vemos que las normas carecen ya de eficacia y la solución a la situación planteada ha perdido vigencia por el transcurso del tiempo, por lo que no corresponde su estudio.-----

Por las consideraciones que anteceden, debe hacerse lugar a la acción de inconstitucionalidad presentada contra el Art. 9 de la Ley N.º 2345/03, modificado por el Art. 1.º de la Ley N.º 4252/2010, declarándolo inaplicable para el Señor Maximino Espínola Martínez; debe rechazarse la acción de inconstitucionalidad presentada contra los Arts.3 y 10 de la Ley 2345/03 modificados por el Art. 1.º de la Ley N.º 4252/2010; en referencia a los arts. 108 y 113 de la Ley 554 y el Art. 260 del Decreto N.º 4774/2016 la acción debe ser archivada. ES MI VOTO.-----

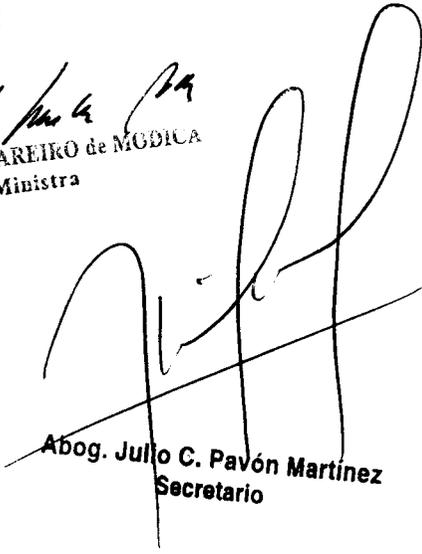
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:


Miryam Peña Candia
MINISTRA C.S.J.


Dr. ANTONIO FRETES
Ministro


GLADYS E. BAREIRO de MÓNICA
Ministra

Ante mí:


Abog. Julio C. Pavón Martínez
Secretario

SENTENCIA NÚMERO: 1603.

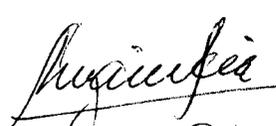
Asunción, 13 de noviembre de 2017.-

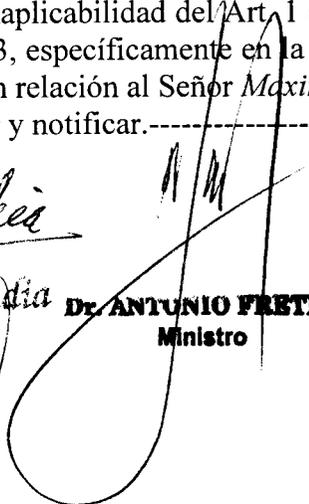
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la

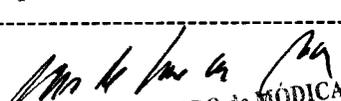
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala Constitucional
RESUELVE:

HACER LUGAR *parcialmente* a la acción de inconstitucionalidad promovida y, consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 1 de la Ley N° 4252/10 – que modifica el Art. 9 de la Ley N° 2345/03, específicamente en la parte que establece la obligatoriedad de acogerse a la jubilación, con relación al Señor *Maximino Espinola Martínez*.-----

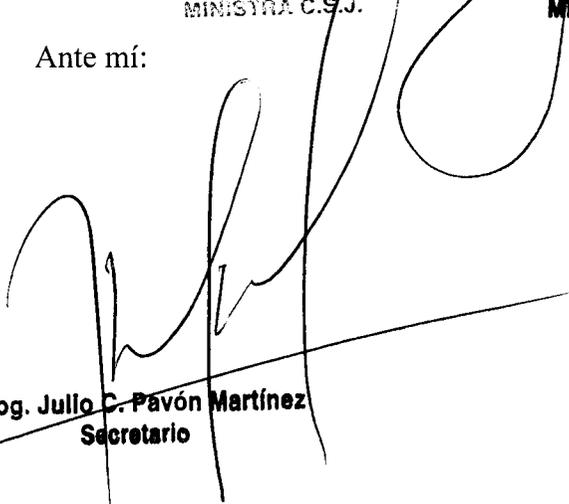
ANOTAR, registrar y notificar.-----


Miryam Peña Candia
MINISTRA C.S.J.


Dr. ANTONIO FRETES
Ministro


GLADYS E. BAREIRO de MÓNICA
Ministra

Ante mí:


Abog. Julio C. Pavón Martínez
Secretario

